



Chile extiende pesquisa por uso irregular de licencias médicas a policías y Fuerzas Armadas

Acciones El Ministerio Público inició una investigación penal para determinar responsabilidades, tanto de los empleados involucrados como de los médicos que podrían haber emitido certificados falsos.

Publmetro

La Contraloría General de la República de Chile amplió este lunes el alcance de su investigación sobre el presunto uso fraudulento de licencias médicas en el sector público, incluyendo ahora a las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales.

Así lo confirmó la contralora Dorothy Pérez durante una intervención ante una comisión del Senado, donde entregó nuevos antecedentes sobre una trama que involucra a 25.078 funcionarios públicos que, entre 2023 y 2024, viajaron fuera del país mientras se encontraban supuestamente incapacitados para trabajar.

“Es una situación grave que viene ocurriendo desde hace años”, declaró Pérez en una rueda de prensa posterior, al remarcar la necesidad de revisar profundamente los mecanismos de control en torno a las licencias médicas.

Cruce de información

El caso salió a la luz tras un cruce de información entre las salidas del país registradas por la Policía de Investigaciones (PDI) y las licencias médicas autorizadas en ese mismo período. El informe generó indignación en el espectro político completo, con demandas de investigaciones internas y sanciones ejemplares.



Investigaciones. La contralora relató casos donde empleados públicos aprovecharon su supuesta incapacidad médica para cursar estudios en el extranjero o realizar extensos recorridos turísticos por Europa. / AGENCIA PEXELS

El patrón detectado revela que muchos de los viajes se concentraron entre septiembre y diciembre, coincidiendo con las vacaciones de primavera y verano. Algunas de las instituciones más afectadas por estas irregularidades incluyen la Junta Nacional de Jardines Infantiles (con 2.280 casos), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719).

Acciones

Durante su comparecencia, la contralora relató casos donde empleados públicos aprovecharon su supuesta incapacidad médica para cursar estudios en el extranjero o realizar extensos recorridos turísticos por Europa. Agregó que la Contraloría ya

cuenta con indicios de viajes realizados dentro de Chile bajo las mismas condiciones y que se trabaja en nuevas herramientas para detectar desplazamientos a nivel nacional.

Pérez también señaló que se está analizando una modalidad aún más preocupante: funcionarios con licencias prolongadas que, en realidad, estarían prestando servicios para empleadores del sector privado. “Estamos abordando también los casos de doble empleo que podrían configurar delitos graves”, afirmó.

Inicia investigación

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación penal para determinar

responsabilidades, tanto de los empleados involucrados como de los médicos que podrían haber emitido certificados falsos.

El presidente Gabriel Boric se pronunció por primera vez sobre el escándalo, calificando las acciones como una traición a la confianza pública.

“Hay personas que deben ser destituidas. No se puede normalizar que las licencias médicas se utilicen para otros fines, como vacacionar en el extranjero”, dijo el mandatario en una declaración a la prensa.

Boric añadió que su gobierno será tajante frente a este tipo de prácticas.

“La respuesta debe ser clara y severa. No puede haber

espacio para quienes abusan de los recursos públicos ni para quienes falsifican certificados médicos”, sentenció.

Entre los nombres que ya han salido a la luz se encuentran el alcalde del sector capitalino de Macul, Eduardo Espinoza (de tendencia ultraderechista), y el exministro comunista Marco Barraza, quien renunció esta semana a su cargo como asesor del Ministerio del Trabajo.

También dejaron sus cargos Iván Mendoza, quien hasta hace poco era vicepresidente del Colegio Médico, y Raúl Domínguez, funcionario de alto rango en la Subsecretaría de Telecomunicaciones y amigo cercano del presidente Boric.